

Asamblea
Punto 3

A/153/3-Inf.1
30 de julio de 2026

Nota conceptual para el Debate General
Fortalecer la buena gobernanza y las capacidades de las comunidades mediante la inclusión, la confianza y la igualdad de oportunidades

Las sociedades prosperan cuando son gobernadas de forma responsable, eficaz e inclusiva. Como sistema de instituciones, procesos y prácticas mediante los cuales se gestionan los asuntos de interés común, la buena gobernanza se centra, en última instancia, en instituciones públicas y procesos de toma de decisiones que sirven a la ciudadanía y le permiten influir en las decisiones que afectan a su vida: protegiendo sus derechos, respondiendo a sus necesidades, gestionando los recursos públicos de forma responsable y creando igualdad de oportunidades para todos. La buena gobernanza es reflejada en la medida en que las personas pueden acceder a la justicia, confiar en las instituciones públicas, beneficiarse de servicios públicos de alta calidad y tener la certeza de que su voz importa.

Esta visión constituye la base del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. El ODS 16 vincula las instituciones eficaces, responsables e inclusivas con el Estado de derecho, el acceso a la justicia, las libertades fundamentales y las sociedades pacíficas. Asimismo, impulsa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: sin instituciones transparentes, abiertas a la participación ciudadana y capaces de garantizar leyes justas, presupuestos sólidos, servicios públicos de alta calidad y una implementación eficaz de políticas y programas, los objetivos de desarrollo y paz son más difíciles de alcanzar y mantener.

Por lo tanto, la verdadera prueba de la buena gobernanza reside en sus resultados en la vida de las personas. Las instituciones deben ser no solo transparentes y responsables, sino también capaces, receptivas y eficaces. Las decisiones deben basarse en datos fiables, investigación, consulta pública y una evaluación de lo que funciona. La formulación de políticas basada en la evidencia puede ayudar a los gobiernos y parlamentos a identificar necesidades, asignar recursos de manera más eficaz, anticipar consecuencias no deseadas y ajustar las políticas cuando los resultados no son los esperados. También ayuda a los parlamentarios a comprender mejor las experiencias reales de las personas a las que representan y a garantizar que las políticas respondan a sus necesidades.

La confianza es fundamental en esta ecuación. La confianza pública se fortalece cuando las instituciones comunican cómo se toman las decisiones, aplican las normas de forma coherente, reconocen sus deficiencias y demuestran resultados. La confianza también crece cuando las personas se sienten escuchadas, tratadas con justicia y con la posibilidad de exigir responsabilidades a quienes toman las decisiones. Por el contrario, la corrupción, la impunidad, el acceso desigual a la justicia, la escasa rendición de cuentas, la mala gestión y la percepción de doble rasero socavan la confianza y debilitan la legitimidad de los sistemas de gobernanza en todos los niveles.

La buena gobernanza depende, en particular, de la inclusión y el empoderamiento. Las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos que siguen estando infrarrepresentados deben poder participar de forma significativa en la vida pública e influir en las decisiones que les afectan. La representación es importante, pero también lo es la calidad de la participación: toda persona necesita acceso a la información, oportunidades reales para ser escuchada y vías prácticas a través de las cuales su voz pueda influir en las prioridades, las leyes, los presupuestos y los servicios públicos. La educación cívica puede dotar a los jóvenes, en particular, del conocimiento, las habilidades y la confianza necesarios para comprender las instituciones democráticas, ejercer sus derechos y responsabilidades, y participar de forma constructiva como ciudadanos informados y futuros líderes.

Por lo tanto, las comunidades no son meras beneficiarias de la gobernanza; quienes las conforman son socios esenciales para su configuración, implementación y evaluación. Empoderar a las comunidades implica brindarles la información, el espacio, la capacidad y los canales necesarios para identificar prioridades, contribuir a la búsqueda de soluciones, exigir responsabilidades a las instituciones y asumir una mayor participación en el desarrollo local. Permitir que las experiencias vividas por las personas influyan en las decisiones públicas puede hacer que las instituciones sean más receptivas y estén mejor conectadas con la realidad sobre el terreno. La sociedad civil, la academia, el sector privado y los líderes religiosos, tradicionales y comunitarios pueden contribuir a movilizar el conocimiento, fortalecer los lazos sociales, fomentar la rendición de cuentas y generar resiliencia, al tiempo que ayudan a garantizar que las voces de quienes menos se escuchan sean incluidas en la toma de decisiones públicas.

Las nuevas tecnologías, cuando son utilizadas de forma responsable, pueden respaldar estos esfuerzos. Las herramientas digitales pueden ampliar el acceso a la información y a los servicios públicos, facilitar la participación, mejorar la recopilación y el uso de datos, y ayudar a las instituciones a comunicarse de forma más directa con la ciudadanía, incluyendo a quienes tradicionalmente han enfrentado barreras para participar. Al mismo tiempo, cuando las salvaguardias son débiles, la tecnología puede reforzar la exclusión, contribuir a la difusión de desinformación y menoscabar los derechos de las personas. Por lo tanto, la buena gobernanza exige que la innovación digital sea transparente, inclusiva, segura, respetuosa de los derechos y sujeta a supervisión democrática.

Los parlamentos se encuentran en una posición privilegiada para reunir todos los elementos de la buena gobernanza. Ya sea en sus circunscripciones, a través de consultas públicas o en su trabajo parlamentario, los parlamentarios suelen ser los primeros en escuchar directamente a las personas cuyas vidas se ven afectadas por las decisiones públicas. Al ejercer sus funciones legislativas, presupuestarias, de supervisión y de representación, los parlamentos pueden cerrar la brecha entre los compromisos y la implementación: examinando si las políticas ofrecen resultados medibles, responder adecuadamente a las necesidades de la población y mejorar su vida cotidiana, garantizando que las administraciones públicas, el sistema judicial y demás instituciones al servicio de la ciudadanía rindan cuentas, sean inclusivas y cuenten con los recursos suficientes.

Se invita a los delegados que participan en el Debate General de la 153ª Asamblea de la UIP a reflexionar sobre las siguientes cuestiones:

- ¿Cómo pueden los parlamentos fortalecer una gobernanza transparente, responsable, inclusiva y eficaz, y ayudar a combatir la corrupción para que la ciudadanía tenga mayor confianza en las instituciones públicas?
- ¿Cómo pueden los parlamentos empoderar a las personas y a las comunidades a las que pertenecen, y trabajar con diferentes partes interesadas, para generar confianza, promover un desarrollo que responda a las necesidades locales, fortalecer la apropiación comunitaria y garantizar una participación significativa de las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos subrepresentados?
- ¿Cómo pueden los parlamentos promover una toma de decisiones basada en evidencia, en particular mediante un mejor uso de los datos, la investigación, las consultas públicas y la evaluación, a fin de garantizar que las políticas respondan a las realidades que viven las personas y mejoren los resultados para todos, especialmente para las personas que más lo necesitan?
- ¿Cómo pueden los parlamentos aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la participación significativa, facilitar el acceso a información fiable y garantizar servicios públicos de alta calidad, al tiempo que protegen los derechos humanos?